

## ECUADOR (Nivel 2)

Ecuador es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños que son objeto de trata para fines de explotación sexual comercial y trabajos forzados. Se cree que la mayoría de las víctimas de esta trata son niños a quienes se transporta dentro del país desde las zonas fronterizas y el altiplano central a los centros urbanos para explotación sexual comercial, así como también para trabajos domésticos en servidumbre, mendicidad forzada y trabajo forzoso en minas y otras tareas peligrosas. Según un estudio reciente del gobierno, las principales provincias de destino de la trata de personas son Pichincha, Guayas, Esmeraldas y Manabí. Los niños ecuatorianos son enviados a Colombia, Venezuela, Chile y la República Dominicana para trabajos forzados, principalmente para la mendicidad callejera, venta forzada y servicios domésticos. Las mujeres ecuatorianas se destinan a Colombia, Perú, Venezuela y Europa occidental para la explotación sexual comercial. En menor medida, Ecuador es país de destino de la trata de mujeres y niñas colombianas y peruanas para la explotación sexual comercial, principalmente en zonas fronterizas, la región amazónica y ciudades como Quito, Santo Domingo y Esmeraldas. Ecuador es país de tránsito para asiáticos con rumbo al Hemisferio Occidental; si bien algunos migrantes consienten en pasar de contrabando por el Ecuador durante el viaje, otros caen víctimas de los tratantes de personas.

El Gobierno del Ecuador no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata; sin embargo, está realizando esfuerzos considerables para lograrlo. El gobierno aplicó firmes medidas para el cumplimiento de la ley contra los culpables de la trata de personas con fines de explotación sexual, además de medidas para ayudar a las víctimas. No obstante, dichas medidas no aliviaron suficientemente el trabajo forzoso, los delitos de trata de adultos con fines sexuales ni las pruebas de complicidad de ciertos funcionarios locales en relación con estos delitos. Además, la reciente decisión del gobierno de cancelar su requisito de visa de turista ha dado como resultado un gran flujo de migrantes al país, algunos de los cuales pueden haber sido objeto de la trata de personas.

Recomendaciones para Ecuador: Seguir aplicando medidas firmes para investigar y enjuiciar los delitos de trata de personas –incluido el trabajo forzoso– y condenar y sancionar a los infractores, incluidos los funcionarios cómplices de las actividades de trata, en especial a nivel local; aumentar la capacitación en medidas para combatir la trata de personas para los funcionarios del orden, entre otros; aumentar los allanamientos en burdeles donde se explota a menores; y preparar procedimientos oficiales para identificar a las víctimas de la trata de personas entre los segmentos vulnerables de la población, en especial mujeres adultas en prostitución y migrantes extranjeros sujetos a elevadas deudas por contrabando.

### Enjuiciamiento

En el año transcurrido, el gobierno demostró haber realizado esfuerzos firmes pero incompletos contra el delito de la trata de personas. Ecuador prohíbe todas las formas de trata de personas en virtud de una enmienda a su código penal, realizada en 2005. La trata con fines de explotación laboral conlleva una sanción de seis a nueve años de encarcelamiento y la trata para fines de explotación sexual conlleva una sanción de ocho a doce años. Las sanciones por trata de personas pueden aumentar a un máximo de 35 años por circunstancias agravantes. Dichas sanciones son suficientemente estrictas y equivalentes a las prescritas por otros delitos. Durante el período del presente informe, las autoridades ecuatorianas abrieron 85 casos de trata en todo el

país y, en 38 casos de años anteriores, lograron condenas de cuatro a doce años de encarcelamiento. Dichos resultados constituyen un aumento considerable de los esfuerzos al compararlos con lo realizado en 2007, cuando se abrieron 76 casos y condenaron a cinco delincuentes por la trata de personas.

Durante el período del presente informe, la mayoría de los casos tuvieron que ver con inducir a menores a la prostitución. Algunos juicios se relacionan con la explotación laboral, pero no parecen equiparables a la incidencia del trabajo forzoso en el país, en especial por el gran número de niños explotados para la mendicidad y el trabajo doméstico forzados. Pese a los informes sobre corrupción por la trata de personas, en especial en lo relacionado con funcionarios del registro civil que expiden documentos de identidad falsos a menores colombianos, el año pasado no se llevaron a cabo investigaciones, enjuiciamientos ni condenas de funcionarios por este motivo. Según la policía ecuatoriana, por lo general los propietarios de burdeles utilizan documentos de identidad falsos para explotar a menores extranjeros en la prostitución y para evitar la responsabilidad penal por infracciones relacionadas con la inmigración y trata en caso de un allanamiento policial. El gobierno siguió capacitando al personal del orden contra la trata de personas y organizó una conferencia internacional con los países vecinos sobre la mendicidad forzada.

### Protección

El año pasado el gobierno ecuatoriano comprometió más recursos para ayudar a las víctimas de la trata de personas. El gobierno aseguró a las víctimas acceso a servicios jurídicos, médicos y psicológicos en establecimientos de atención para víctimas, si bien en muchas partes del país siguen faltando refugios para dichas víctimas. El gobierno otorgó fondos a varias ONG para que provean servicios adicionales a las víctimas, habiendo asignado el año pasado \$423.467 en recursos para este fin. Por medio de su Programa de Protección a Víctimas y Testigos, el Ministerio Público estableció unidades policiales especializadas en el combate contra la trata en las ciudades de Guayaquil, Machala, Portoviejo, Cuenca y Quito. Estas unidades acompañan a otras autoridades policiales en los allanamientos en burdeles para coordinar los servicios de protección inmediata a las víctimas reconocidas de trata de personas y de ayuda a los testigos de las víctimas durante los procesos penales. El año pasado el gobierno identificó y ayudó a unas 56 víctimas de la trata de personas, de las cuales 12 aceptaron los servicios del programa de protección. El gobierno alentó a las víctimas a que ayudaran en la investigación y enjuiciamiento de los tratantes. Las fuerzas del orden y los servicios sociales emplearon procedimientos oficiales para reconocer a los menores que son víctimas de la explotación sexual con fines comerciales, pero no demostraron haber realizado esfuerzos adecuados para hacer lo mismo con los adultos que son víctimas, como las mujeres explotadas en burdeles y otras poblaciones vulnerables. Las autoridades no penalizaron a las víctimas de la trata por haber cometido actos ilícitos como resultado directo del haber sido objeto de trata. El gobierno ecuatoriano no proporcionó vías jurídicas para evitar el envío de víctimas extranjeras a países donde serían objeto de penurias o represalias, si bien por lo general no se deportó a las víctimas extranjeras.

### Prevención

El año pasado, el Gobierno del Ecuador realizó esfuerzos de prevención de la trata de personas. Las altas autoridades del gobierno, entre ellas el Presidente, condenaron en discursos públicos la

trata de personas. El gobierno siguió realizando campañas contra la mendicidad forzada y el turismo sexual de menores, además de una campaña por los medios de difusión destinada a advertir a los “clientes” de que la prostitución infantil es un delito sancionado por la ley. Sin embargo, durante el período del informe, el gobierno no declaró haber tomado otras medidas para reducir la demanda de actos sexuales comerciales de adultos ni el trabajo forzoso de adultos.